



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

DEMANDANTE: HÉCTOR DE JESÚS GONZÁLEZ ARANGO.
DEMANDADO: PROTECCIÓN S.A. y otros.
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO.
DECISIÓN: CONFIRMA.

En la fecha, **EI TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados Nancy Gutiérrez Salazar, Carlos Alberto Lebrún Morales y María Eugenia Gómez Velásquez, se reunió para resolver el recurso de apelación presentado por el demandante, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor **HÉCTOR DE JESÚS GONZÁLEZ ARANGO**, en contra de **PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos de la sustitución de poder obrante en el proceso, se reconoce personería para actuar en representación de **COLPENSIONES**, a la abogada INGRIS RUIDIAZ SOTO, con Tarjeta Profesional 240.222 del C.S. de la J..

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

DEMANDANTE.

Dice que la presente decisión se debe tomar con base en la Sentencia Laboral 3464 de 2016, atendiendo principios de solidaridad, equidad, justicia social, universalidad, progresividad y la ayuda a proteger personas con protección constitucional especial, aplicándose analógicamente las consideraciones expuestas en la referida decisión. Que se debe acceder a las suplicas del libelo genitor del proceso por asistirle interés factico y jurídico, revocándose la sentencia de instancia.

COLPENSIONES.

Expone que la Ley 100 de 1993, aseguró la libertad de escogencia de régimen pensional, el deber de información y la imposibilidad de rechazar a las personas que cumplan con los requisitos para afiliarse al RAIS; y que el artículo 167 del C.G.P. establece la carga de la prueba a cargo de quien alega un supuesto de hecho; por lo que, al haberse dado el traslado de régimen pensional en septiembre de 1994, solo se exigía a las administradoras de pensiones y cesantías, atender el formulario con el lleno de los requisitos, sin imponer cargas adicionales, por lo que al demandante le corresponde demostrar los hechos narrados en la demanda; máxime que a este nadie lo obligó a trasladarse de régimen. Que se debe tener en cuenta la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín en sentencia del 14 de agosto de 2019, y la SL373 de 2021, Radicado 84475 proferida por la C.S.J, ya que si bien no se está en presencia de un pensionado, si existe una situación fáctica y jurídica consolidada que afecta el sistema pensional.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES:

- Declarar la nulidad o Ineficacia de la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-, encontrándose válidamente afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPMPD-.
- Condenar a PROTECCIÓN S.A. a devolver a Colpensiones la totalidad de los aportes de la cuenta del demandante, con sus respectivos intereses y rendimientos financieros; y a ésta a reconocer la pensión de vejez desde el 25 de enero de 2006, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios y la indexación.

HECHOS:

- Dijo que se afilió al RPMPD el 1 de enero de 1967, pero luego se afilió a PROTECCIÓN S.A., sin que al momento del traslado de régimen pensional hubiera sido debidamente asesorado sobre las consecuencias de dicho traslado.
- Que cotizó más de 1.000 semanas durante toda su vida, con anterioridad al 2 de enero de 2006, cuando cumplió 60 años de edad, por lo que reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el RPMPD.

- Que el 8 de septiembre de 2008, PROTECCIÓN S.A. le reconoció la suma de \$97.088.732 por concepto de devolución de saldos, argumentando que no cumplía ni con el capital, ni con la densidad de semanas necesarias para acceder a pensión alguna.

CONTESTACIÓN:

Se opusieron a las pretensiones.

PROTECCIÓN S.A.

- Admitió el traslado de régimen pensional argumentando que fue una decisión libre y voluntaria del demandante y que reclamó la devolución de saldos en cuantía de \$97.656.005. Negó que no haya sido debidamente asesorado, ya que en cumplimiento del deber legal le ofrecieron una asesoría integral, eficaz y transparente. Y expresó que el demandante promovió un proceso con el mismo objeto y causa que el que hoy se debate.
- Excepciones de fondo: pago por cumplimiento de la obligación – devolución de saldos, cumplimiento de los requisitos formales en la afiliación, acto jurídico existente y válido, ausencia de vicios de consentimiento, buena fe, prescripción de la acción de nulidad del acto jurídico, y análisis y definición de la situación previsional del demandante por parte del sistema general de pensiones.

COLPENSIONES.

- Excepciones de mérito: prescripción, nulidad relativa, vencimiento del plazo para reactivar la afiliación, inexistencia de la obligación por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez, falta de causa jurídica para ser beneficiario del régimen de transición, falta de legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de los intereses de mora, improcedencia de la indexación de las condenas, buena fe de Colpensiones, compensación e imposibilidad de condena en costas.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

- Excepciones de mérito: inexistencia de la obligación y ausencia de responsabilidad de la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito público y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Absolvió a las demandadas de todas las pretensiones incoadas por el demandante. Y Condenó a este último en Costas Procesales.

APELACIÓN DEMANDANTE.

Dice que se debe acceder a las pretensiones de la demanda, ya que hubo ausencia de información y no se cumplieron las obligaciones vigentes para la época en lo que tiene que ver con el deber del buen consejo, sin que el argumento para absolver de las pretensiones de la demanda pueda ser la existencia de terceros de buena fe, toda vez que si el presupuesto de validez de los actos es ésta última, fue PROTECCIÓN S.A. la que incurrió en las omisiones informativas, pese a que era esta la que tenía que respetar el derecho de los terceros de buena fe. Que no hay lugar a aplicar la Sentencia de Unificación proferida por la Sala Especializada del Tribunal Superior de Medellín, por tratarse de un caso disímil, ya que en aquel se trató de una persona que goza de la pensión de vejez a cargo de RAIS, sin renunciar a tal beneficio mínimo, pero en el presente asunto no se trata de un pensionado, sino de una persona a quien se le reconoció una prestación temporal como lo es la devolución de saldos, sin que este pueda renunciar a su derecho pensional el cual es irrenunciable. Que en el presente asunto se debe tomar una decisión justa y razonable para las partes, como es que los valores recibidos por devolución de saldos se compensen con mesadas pensionales.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

- **Objeto:** Determinar si en el presente caso, donde ya hubo devolución de saldos en el RAIS, es o no procedente la declaración de Ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por el demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y las consecuencias que de ello se derivan. Veamos:

No es objeto de discusión que el demandante se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, inicialmente al ISS hoy COLPENSIONES desde el 1 de enero de 1967, según se infiere de la Historia Laboral obrante a fls 29 a 31, trasladándose al RAIS a través del Fondo privado de pensiones PROTECCIÓN S.A. el 1 de septiembre de 1994, tal como consta en la solicitud de vinculación de folio 86 del expediente; y que una vez solicitó la Pensión de Vejez el 8 de septiembre de 2008 –fl. 32-, al no cumplir con el capital suficiente para obtener tal prestación ni reunir el número de semanas mínimas exigidas para la procedencia de la garantía de pensión mínima, se le reconoció la devolución de saldos, según se desprende de la comunicación expedida por la jefe del Departamento de beneficios y pensiones, y la analista de beneficios y pensiones de la demandada Protección S.A. -fls. 33 y 34-, la cual retiró el demandante el 12 de septiembre de 2008 en cuantía de \$97.088.732, según consta a folios 39 y 143 del expediente.

Respecto al tema de la Ineficacia del traslado de régimen pensional, es cierto que conforme a la línea jurisprudencial construida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Cas. Laboral, vertida en Sentencias Radicado 33.083 del 22 de noviembre de 2011, y 46.292 del 03 de septiembre de 2014, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, y más recientemente en las SLs 1452 del 3 de abril de 2019 Rad 68852 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y 1421 del 10 de abril de 2019, Radicado N.º 56174 M.P. Gerardo Botero Zuluaga, para los casos de **afiliados**, las Administradoras de Fondos de pensiones tienen el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculan a ellas, que surge desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de la afiliación, por lo que el engaño en el que incurre la entidad, tiene su fuente en la falta al deber de información, tanto en lo que se afirma, como en lo que se omite informar sobre lo que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue, independientemente que para el momento del traslado de régimen pensional, una norma lo exija o no.

No obstante lo anterior, tratándose de pensionados, La Sala Especializada Laboral de este Tribunal, profirió Sentencia de Unificación el 14 de agosto de 2019, en la que decidió no acceder a la declaración de ineficacia en los casos de pensionados por el RAIS.

Sobre el particular en la referida providencia se manifestó:

“... Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum...

Valga también mencionar además las situaciones de quienes se han pensionado anticipadamente y han negociado su bono pensional antes de la fecha de redención normal. Ese tercero inversionista que se ha beneficiado en el mercado de valores, mediante un negocio totalmente legítimo, querrá una respuesta cuando la justicia laboral disponga la anulación de esa transacción.

Estos serían solo dos ejemplos del impacto que en el mundo real tendría declarar la ineficacia de la afiliación de quienes ya se han pensionado en el régimen de ahorro individual. Impacto que responsablemente esta Sala quiere evitar, decidiendo mediante esta sentencia de unificación que no podrá declararse la ineficacia ni la nulidad de su afiliación...”

Ahora, es cierto que el caso a estudio no versa sobre un pensionado, sino sobre alguien que estando afiliado al RAIS, se le reconoció la devolución de saldos –aquí demandante-. Sin embargo, contrario a lo expuesto por su apoderado recurrente, en cuanto que para resolver el objeto de debate no se puede acoger la Sentencia en cita, considera la Sala que ello no solo puede sino que también debe ser posible, teniendo en cuenta que tanto en uno como en otro caso no solo se generó un estatus diferente al de afiliado, sino que

también se crearon nuevas situaciones jurídicas en las que intervinieron y resultaron afectados intereses de terceros y que se hacen insostenibles para el sistema pensional.

Aunado a lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reciente Sentencia 373 del 10 de febrero de 2021, Radicado 84.475, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, analizó las consecuencias y efectos de declarar la ineficacia de traslado de régimen de un pensionado, lo que cambiando lo cambiante, también aplica para las personas que reciben la devolución de saldos, concluyendo que tal reconocimiento configura una nueva situación jurídica consolidada que no es razonable revertir, porque esto daría lugar a “disfuncionalidades” que afectarían no solo al sistema pensional sino también actos, derechos e intereses de terceros. Así lo manifestó:

“... si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:

Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.

...

Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.

...

Ni que decir cundo el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

... la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones....”.

Sentencias éstas que tienen efectos vinculantes para todos los miembros de la Sala, debiéndose resolver de manera uniforme las situaciones que tengan los mismos o parecidos supuestos fácticos y jurídicos, en aras de preservar el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia, conforme lo expuso la Corte

Constitucional en la SU 611 del 4 de octubre de 2017, M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la que sobre el carácter vinculante del precedente judicial, expresó:

“...[r]econocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado [...] redundaría en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad del precedente garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera....” (subraya fuera de texto).

8.9. Por tanto, la obligatoriedad de la jurisprudencia de las altas cortes es una exigencia orientada a que las decisiones judiciales estén guiadas por un parámetro de igualdad, lo que, a su vez, confiere seguridad jurídica a la aplicación del Derecho y permite que los usuarios de la administración de justicia puedan tener confianza legítima sobre las normas que regulan sus relaciones jurídicas...”

Y el Consejo de Estado sobre el particular en Sentencia Radicación N° 25000-23-42-000-2013-02235-01(2602-16)CE-SUJ2-016-19, sostuvo:

“139. La Corte Constitucional en Sentencia C-816 de 2011, estableció con claridad que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones– y la Corte Constitucional –como guardiana de la Constitución–, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica contenidos en los artículos 13 y 83 de la Carta Política.(88) Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio...”

Así las cosas, esta Sala de decisión acogiendo el referido criterio, procederá a declarar improcedente la solicitud de Ineficacia de traslado de régimen pensional del demandante, estando demostrado que éste no sólo autorizó la emisión del bono pensional –fl. 91-, sino que además, el jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución 5518 del 26 de agosto de 2008, emitió y ordenó el pago del cupón principal del bono pensional del demandante a cargo de la Nación –fls 242 a 245-, y éste cobró la devolución de saldos el 12 de septiembre de 2008 -fls 39 y 143-.

Consecuente con lo anterior, se **CONFIRMARÁ** la sentencia de instancia.

Por sustracción de materia no hay lugar a estudiar los demás motivos de inconformidad expuestos en la sustentación del recurso interpuesto.

Sin Costas Procesales de segunda instancia, dado el reciente cambio de criterio.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el 24 de febrero de 2020, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el señor **HÉCTOR DE JESÚS GONZÁLEZ ARANGO**, en contra de **PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, según las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin Costas Procesales de segunda instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se firma en constancia.

Los magistrados;



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

ACLARACIÓN DE VOTO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N° **054** de abril 05 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>